

## Resumen

PROCEDIMIENTO MODIFICACION MEDIDAS. Se fija libertad en el régimen de visitas de la hija( de casi 16 años) con la madre.

**Sentencia 1 instancia** numero 10 dice

1º.- la guarda y custodia de la hija se otorga al progenitor

2º.- No procede fijar régimen de visitas materno filial dejando su ejercicio, dada la edad de la menor, a libre acuerdo madre-hija.

3º.- En concepto de pensión de alimentos de la hija menor, D<sup>a</sup>. Florinda , abonará mensualmente a D. Jose Antonio dentro de los cinco días primeros de cada mes un mínimo vital de 130 euros y gastos extraordinarios recogidos en medidas provisionales en un porcentaje el padre del 70% y la madre del 30% **Si la madre desarrollara alguna actividad laboral abonará** al progenitor mensualmente dentro de los cinco días primeros de cada mes el 25% de sus ingresos líquidos.

La madre recurre. Cuestiona exclusivamente la inexistencia de pronunciamiento alguno sobre el régimen de comunicación y visitas de la actora/apelante con su hija Pilar.

**La audiencia provincial desestima** el recurso de la madre con base:

- PRIMERO. Al inicio del juicio y tras la exploración judicial de la menor dice anunciada la decisión por la juez( se refiere entiendo a que no pondría visitas ) ningún reparo u objeción se formuló por la representación de D<sup>a</sup> Florinda , no siendo objeto ya de controversia en el acto del juicio nada más que la cuestión económica;
- SEGUNDO., la Juez de Instancia sí que se refiere a la comunicación y visitas entre madre e hija, concluyendo a tenor
  - de la exploración de la menor y
  - la voluntad expresada por esta,
  - de las circunstancias fácticas que concurren al
    - ser conflictiva la actual relación entre D<sup>a</sup> Florinda y su hija,
    - y la edad de Pilar , muy próxima ya a cumplir los 16 años de edad,

que lo más beneficioso es que los contactos en dicha relación materno-filial queden al libre acuerdo entre madre e hija, **pues la imposición a la menor de un contacto no deseado** con su madre en este momento, en una edad en que la voluntad expresada por Pilar no puede considerarse de simple capricho, podría ser contraproducente a la finalidad deseada de que pueda reanudarse con normalidad la comunicación y el progresivo entendimiento entre madre e hija.

**abecera:** Pension alimenticia. Regimen de visitas comunicacion y estancia. Patria potestad

Interpone recurso de apelacion contra la sentencia que ha sido dictada en el procedimiento matrimonial que se ha seguido con el número 508/2019 ante el juzgado de primera instancia número diez de valladolid sobre modificacion de las medidas definitivas adoptadas en anterior proceso de divorcio, solicitando tan solo la parcial revocación de dicha resolución, puesto que en su recurso cuestiona exclusivamente la inexistencia de pronunciamiento alguno sobre el **regimen de comunicacion y visitas** de la actora / apelante con su hija pilar, la cuantía de la **pension de alimentos** dispuesta a su cargo ; y la no imposición de las costas de la primera instancia al demandado.

**Jurisdicción:** Civil

**Ponente:** [José Ramón Alonso-Mañero Pardal](#)

**Origen:** Audiencia Provincial de Valladolid

**Fecha:** 14/12/2020

**Tipo resolución:** Sentencia

**Sección:** Primera

**Número Sentencia:** 433/2020

**Número Recurso:** 235/2020

**Numroj:** SAP VA 1683/2020

**Ecli:** ES:APVA:2020:1683

#### **ENCABEZAMIENTO:**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00433/2020

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 Fax: 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MPD

N.I.G. 47186 42 1 2008 0007453

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000235 /2020

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 10 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: MMC MODIFICACION DE MEDIDAS SUPUESTO  
CONTENCIOSO 0000508 /2019

Recurrente: Florinda

Procurador: ANA ISABEL CAMINO RECIO

Abogado: IGNACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Jose Antonio

Procurador: , DAVID VAQUERO GALLEGO

Abogado: , CESAR MATA MARTIN

SENTENCIA núm. 433/2020

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. FRANCISCO SALINERO ROMÁN

D. JOSÉ-RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL

D<sup>a</sup> EMMA GÁLGERAN SOLSONA

En VALLADOLID, a catorce de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos

de MODIFICACIÓN DE MEDIDAS SUPUESTO CONTENCIOSO nº 508/2019 del Juzgado de Primera Instancia

nº 10 de Valladolid, seguido entre partes, de una, como DEMANDANTE- APELANTE, D<sup>a</sup> Florinda , representada

por la Procuradora D<sup>a</sup> Ana-Isabel Camino Recio y defendida por el Letrado D. Ignacio Fernández Rodríguez; y  
de otra, como DEMANDADA-APELADA, D. Jose Antonio , representado por el Procurador D. David Vaquero

Gallego y defendido por el Letrado D. César Mata Martín; habiendo intervenido el MINISTERIO FISCAL en la

representación que le es propia.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO:**

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 26/02/2020, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Estimando parcialmente la demanda de Modificación de Medidas interpuesta por representación de D<sup>a</sup> Florinda frente a D. Jose Antonio , Acuerdo:

1º.- Sin perjuicio de que ambos padres ostenten la patria potestad sobre la menor la guarda y custodia de la hija se otorga al progenitor, D. Jose Antonio .

2º.- No procede fijar régimen de visitas materno filial dejando su ejercicio, dada la edad de la menor, a libre acuerdo madre-hija.

3º.- En concepto de pensión de alimentos de la hija menor, D<sup>a</sup>. Florinda , abonará mensualmente a D. Jose Antonio dentro de los cinco días primeros de cada mes un mínimo vital de 130 euros y gastos extraordinarios recogidos en medidas provisionales en un porcentaje el padre del 70% y la madre del 30% **Si la madre desarrollara alguna actividad laboral abonará** al progenitor mensualmente dentro de los cinco días primeros de cada mes el 25% de sus ingresos líquidos.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación procesal de la parte demandante, se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte demandada y por el Ministerio Fiscal, se presentaron sendos escritos de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, tras la tramitación correspondiente, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 10/12/2020, en el que tuvo lugar lo acordado.

Vistos, siendo Magistrado-Ponente, el Ilmo. Sr. D. JOSÉ-RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL.

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

PRIMERO.- D<sup>a</sup> Florinda interpone recurso de apelación contra la sentencia que ha sido dictada en el procedimiento matrimonial que se ha seguido con el número 508/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Valladolid sobre Modificación de las Medidas Definitivas adoptadas en anterior proceso de Divorcio, solicitando tan solo la parcial revocación de dicha resolución, puesto que en su recurso cuestiona exclusivamente la inexistencia de pronunciamiento alguno sobre el régimen de comunicación y visitas de la actora/apelante con su hija Pilar , la cuantía de la pensión de alimentos dispuesta a su cargo; y la no imposición de las costas de la primera instancia al demandado.

El Ministerio Fiscal se opone al recurso de apelación interpuesto e interesa la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- **El recurso de apelación interpuesto no puede ser estimado por este Tribunal de Apelación.** Por el contrario, procede la íntegra confirmación de la resolución recurrida al ser la misma ajustada a derecho y resultado de una valoración e interpretación por la Juez de Instancia de la prueba practicada y obrante autos que esta Sala en lo sustancial expresamente asume, hace enteramente propia y da por reproducida al objeto de evitar innecesarias repeticiones.

En primer lugar, y por lo que se refiere al motivo de recurso relativo al régimen de comunicación y visitas de D<sup>a</sup> Florinda con su hija Pilar denuncia la parte apelante la inexistencia de pronunciamiento al respecto, instando de la Sala que se fije una franja horaria, al menos un día a la semana, en la que madre e hija puedan comunicarse vía telefónica al objeto de que no se infrinja lo que viene establecido en el artículo 94 del Código Civil.

El motivo no puede ser estimado por esta Sala.

En primer término, porque anunciada su decisión por la Juez de Instancia **al inicio del acto del juicio y tras la exploración judicial** de Pilar , ningún reparo u objeción se formuló por la representación de D<sup>a</sup> Florinda , no siendo objeto ya de controversia en el acto del juicio nada más que la cuestión económica;

en segundo término, porque en contra de lo que sostiene la apelante en su recurso, la Juez de Instancia sí que se refiere a la comunicación y visitas entre madre e hija, concluyendo a tenor de la **exploración de la menor y la voluntad expresada** por esta, de **las circunstancias fácticas** que concurren al **ser conflictiva la actual** relación entre D<sup>a</sup> Florinda y su hija, y **la edad de Pilar** , muy próxima ya a cumplir los 16 años de edad, que **lo más beneficioso es** que los contactos en dicha relación materno-filial queden al libre acuerdo entre madre e hija, **pues la imposición a la menor de un contacto no deseado** con su madre en este momento, en una edad en que la voluntad expresada por Pilar **no puede considerarse de simple capricho**, podría ser contraproducente a la finalidad deseada de que pueda reanudarse con normalidad la comunicación y el progresivo entendimiento entre madre e hija.

TERCERO.- El segundo motivo de recurso refiere, para cuestionar la decisión adoptada en relación con la pensión de alimentos que le ha sido impuesta, la carencia de ingresos propios de D<sup>a</sup> Florinda , que no desempeña actividad laboral alguna, siendo su actual pareja, con la que convive more uxorio, quien satisface todas sus necesidades y atiende las obligaciones económicas que para esta suponen los gastos derivados de la copropiedad que mantiene con el demandado/apelado sobre la que fuera vivienda ganancial en la localidad de DIRECCION000 (Valladolid).

La Juez de Instancia determina que en atención a la edad de D<sup>a</sup> Florinda , aún joven, a su muy reciente inscripción en el servicio de empleo (año 2019), al acuerdo alcanzado en procedimiento anterior para suprimir su derecho de uso sobre el chalet ganancial y la pensión compensatoria, y al proyecto de vida en común que desarrolla con una tercera persona que atiende sus gastos, necesidades e incluso obligaciones económicas derivadas de la propiedad que mantiene sobre bienes gananciales, que al menos deberá contribuir D<sup>a</sup> Florinda a los alimentos de su hija Pilar en el mínimo vital de 130 €, suma que se incrementará hasta el 25% de sus ingresos líquidos caso de acceder al mercado laboral.

En el suplico del recurso se solicita una minoración de la pensión con una petición inconcreta de aplicación del criterio generalizado y pacífico de esta propia Audiencia Provincial, que parece corregirse en el curso del escrito de impugnación desarrollando el motivo aludiendo a la existencia de procedimientos en que por esta Sala se habría fijado un mínimo vital de 50 €. La obligación legal de contribuir a los alimentos de los hijos viene dispuesta en nuestro Código Civil, Ley de Protección Jurídica del Menor y está consagrada constitucionalmente en el artículo 39 de la Constitución Española y solo en circunstancias muy específicas y extremas de precariedad puede soslayarse. Esto no es lo que acontece en el supuesto que nos ocupa, en que la apelante manifiesta su absoluta carencia de ingresos, pero al mismo tiempo parece ofrecer el abono de una cantidad concreta (50 €).

En todo caso, la obligación legal de prestación de alimentos se cuantifica en función de las posibilidades económicas que por todos los conceptos tenga el obligado al pago, y en el caso que nos ocupa se constata que la actora/apelante mantiene la copropiedad sobre el que fuera inmueble ganancial, puesto que contribuye a los gastos derivados de su propiedad y mantenimiento -aunque se asegura que siendo satisfechos por su pareja-, desconociéndose si dicho inmueble -activo patrimonial de

la actora-, se encuentra o no ocupado y si proporciona o está en condiciones de proporcionar rendimiento económico a sus titulares. Es por todo lo indicado que el motivo no puede ser estimado.

CUARTO.- Finalmente propugna la parte apelante en su recurso que se impongan al demandado, sr. Jose Antonio , las costas procesales causadas en ambas instancias. En cuanto a las de la segunda instancia y por expresa disposición legal - artículo 398 en relación con el artículo 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, resulta imposible su imposición al apelado.

En cuanto a las de la primera instancia, acomete la actora/apelante un extenso relato de hechos detallando los avatares judiciales que se han venido produciendo entre ambas partes para concluir que deben serle impuestas a D. Jose Antonio las costas procesales causadas en este procedimiento, obviando en su alegato, no solo que en cada uno de los ya tramitados con anterioridad habrá habido el correspondiente pronunciamiento sobre costas que diera respuesta a la conducta procesal de cada parte, sino también que las costas procesales a imponer en este procedimiento pueden ser tan solo las causadas en el mismo y por razón de su existencia, sin que pueda servir el pronunciamiento a efectuar de castigo a toda una trayectoria procesal anterior, y finalmente que la petición que ahora se hace es novedosa, puesto que en la demanda se solicitaba solo que se impusieran las costas al demandado si este se oponía a las pretensiones de la demanda, resultando no solo que no se opuso frontalmente a todas las pretensiones de la actora, ya que asumió la custodia de su hija Pilar , sino que además ni tan siquiera todas las pretensiones de la actora han sido atendidas, lo que impide igualmente efectuar el pronunciamiento de condena pretendido.

QUINTO.- Al desestimarse el recurso de apelación interpuesto, las costas procesales causadas en este trámite deben serle impuestas a la parte apelante. Arts. 394 y 398 de la L.E.C.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

#### **FALLO:**

1º.- Sin perjuicio de que ambos padres ostenten la patria potestad sobre la menor la guarda y custodia de la hija se otorga al progenitor, D. Jose Antonio .

2º.- No procede fijar régimen de visitas materno filial dejando su ejercicio, dada la edad de la menor, a libre acuerdo madre-hija.

3º.- En concepto de pensión de alimentos de la hija menor, D<sup>a</sup>. Florinda , abonará mensualmente a D. Jose Antonio dentro de los cinco días primeros de cada mes un mínimo vital de 130 euros y gastos extraordinarios recogidos en medidas provisionales en un porcentaje el padre del 70% y la madre del 30% Si la madre desarrollara alguna actividad laboral abonará al progenitor mensualmente dentro de los cinco días primeros de cada mes el 25% de sus ingresos líquidos.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación procesal de la parte demandante, se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte demandada y por el Ministerio Fiscal, se presentaron sendos escritos de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, tras la tramitación correspondiente, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 10/12/2020, en el que tuvo lugar lo acordado.

Vistos, siendo Magistrado-Ponente, el Ilmo. Sr. D. JOSÉ-RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D<sup>a</sup> Florinda interpone recurso de apelación contra la sentencia que ha sido dictada en el procedimiento matrimonial que se ha seguido con el número 508/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Valladolid sobre Modificación de las Medidas Definitivas adoptadas en anterior proceso de Divorcio, solicitando tan solo la parcial revocación de dicha resolución, puesto que en su recurso cuestiona exclusivamente la inexistencia de pronunciamiento alguno sobre el régimen de comunicación y visitas de la actora/apelante con su hija Pilar , la cuantía de la pensión de alimentos dispuesta a su cargo; y la no imposición de las costas de la primera instancia al demandado.

El Ministerio Fiscal se opone al recurso de apelación interpuesto e interesa la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- El recurso de apelación interpuesto no puede ser estimado por este Tribunal de Apelación. Por el contrario, procede la íntegra confirmación de la resolución recurrida al ser la misma ajustada a derecho y resultado de una valoración e interpretación por la Juez de Instancia de la prueba practicada y obrante autos que esta Sala en lo sustancial expresamente asume, hace enteramente propia y da por reproducida al objeto de evitar innecesarias repeticiones.

En primer lugar, y por lo que se refiere al motivo de recurso relativo al régimen de comunicación y visitas de D<sup>a</sup> Florinda con su hija Pilar denuncia la parte apelante la inexistencia de pronunciamiento al respecto, instando de la Sala que se fije una franja horaria, al menos un día a la semana, en la que madre e hija puedan comunicarse vía telefónica al objeto de que no se infrinja lo que viene establecido en el artículo 94 del Código Civil.

El motivo no puede ser estimado por esta Sala. En primer término, porque anunciada su decisión por la Juez de Instancia al inicio del acto del juicio y tras la exploración judicial de Pilar , ningún reparo u objeción se formuló por la representación de D<sup>a</sup> Florinda , no siendo objeto ya de controversia en el acto del juicio nada más que la cuestión económica; en segundo término, porque en contra de lo que sostiene la apelante en su recurso, la Juez de Instancia sí que se refiere a la comunicación y visitas entre madre e hija, concluyendo a tenor de la exploración de la menor y la voluntad expresada por esta, de las circunstancias fácticas que concurren al ser conflictiva la actual relación entre D<sup>a</sup> Florinda y su hija, y la edad de Pilar , muy próxima ya a cumplir los 16 años de edad, que lo más beneficioso es que los contactos en dicha relación materno-filial queden al libre acuerdo entre madre e hija, pues la imposición a la menor de un contacto no deseado con su madre en este momento, en una edad en que la voluntad expresada por Pilar no puede considerarse de simple capricho, podría ser contraproducente a la finalidad deseada de que pueda reanudarse con normalidad la comunicación y el progresivo entendimiento entre madre e hija.

TERCERO.- El segundo motivo de recurso refiere, para cuestionar la decisión adoptada en relación con la pensión de alimentos que le ha sido impuesta, la carencia de ingresos propios de D<sup>a</sup> Florinda , que no desempeña actividad laboral alguna, siendo su actual pareja, con la que convive more uxorio, quien satisface todas sus necesidades y atiende las obligaciones económicas que para esta suponen los gastos derivados de la copropiedad que mantiene con el demandado/apelado sobre la que



fuera vivienda ganancial en la localidad de DIRECCION000 (Valladolid). La Juez de Instancia determina que en atención a la edad de D<sup>a</sup> Florinda , aún joven, a su muy reciente inscripción en el servicio de empleo (año 2019), al acuerdo alcanzado en procedimiento anterior para suprimir su derecho de uso sobre el chalet ganancial y la pensión compensatoria, y al proyecto de vida en común que desarrolla con una tercera persona que atiende sus gastos, necesidades e incluso obligaciones económicas derivadas de la propiedad que mantiene sobre bienes gananciales, que al menos deberá contribuir D<sup>a</sup> Florinda a los alimentos de su hija Pilar en el mínimo vital de 130 €, suma que se incrementará hasta el 25% de sus ingresos líquidos caso de acceder al mercado laboral.

En el suplico del recurso se solicita una minoración de la pensión con una petición inconcreta de aplicación del criterio generalizado y pacífico de esta propia Audiencia Provincial, que parece corregirse en el curso del escrito de impugnación desarrollando el motivo aludiendo a la existencia de procedimientos en que por esta Sala se habría fijado un mínimo vital de 50 €. La obligación legal de contribuir a los alimentos de los hijos viene dispuesta en nuestro Código Civil, Ley de Protección Jurídica del Menor y está consagrada constitucionalmente en el artículo 39 de la Constitución Española y solo en circunstancias muy específicas y extremas de precariedad puede soslayarse. Esto no es lo que acontece en el supuesto que nos ocupa, en que la apelante manifiesta su absoluta carencia de ingresos, pero al mismo tiempo parece ofrecer el abono de una cantidad concreta (50 €). En todo caso, la obligación legal de prestación de alimentos se cuantifica en función de las posibilidades económicas que por todos los conceptos tenga el obligado al pago, y en el caso que nos ocupa se constata que la actora/apelante mantiene la copropiedad sobre el que fuera inmueble ganancial, puesto que contribuye a los gastos derivados de su propiedad y mantenimiento - aunque se asegura que siendo satisfechos por su pareja-, desconociéndose si dicho inmueble -activo patrimonial de la actora-, se encuentra o no ocupado y si proporciona o está en condiciones de proporcionar rendimiento económico a sus titulares. Es por todo lo indicado que el motivo no puede ser estimado.

CUARTO.- Finalmente propugna la parte apelante en su recurso que se impongan al demandado, sr. Jose Antonio , las costas procesales causadas en ambas instancias. En cuanto a las de la segunda instancia y por expresa disposición legal - artículo 398 en relación con el artículo 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, resulta imposible su imposición al apelado.

En cuanto a las de la primera instancia, acomete la actora/apelante un extenso relato de hechos detallando los avatares judiciales que se han venido produciendo entre ambas partes para concluir que deben serle impuestas a D. Jose Antonio las costas procesales causadas en este procedimiento, obviando en su alegato, no solo que en cada uno de los ya tramitados con anterioridad habrá habido el correspondiente pronunciamiento sobre costas que diera respuesta a la conducta procesal de cada parte, sino también que las costas procesales a imponer en este procedimiento pueden ser tan solo las causadas en el mismo y por razón de su existencia, sin que pueda servir el pronunciamiento a efectuar de castigo a toda una trayectoria procesal anterior, y finalmente que la petición que ahora se hace es novedosa, puesto que en la demanda se solicitaba solo que se impusieran las costas al demandado si este se oponía a las pretensiones de la demanda, resultando no solo que no se opuso frontalmente a todas las pretensiones de la actora, ya que asumió la custodia de su hija Pilar , sino que además ni tan siquiera todas las pretensiones de la actora han sido atendidas, lo que impide igualmente efectuar el pronunciamiento de condena pretendido.



QUINTO.- Al desestimarse el recurso de apelación interpuesto, las costas procesales causadas en este trámite deben serle impuestas a la parte apelante. Arts. 394 y 398 de la L.E.C.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, F A L L A M O S Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que ha sido dictada con fecha 26 de febrero de 2020 en el procedimiento matrimonial que se ha seguido con el número 508/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Valladolid, debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, imponiendo a la parte apelante expresa condena en las costas procesales causadas por esta apelación.

La confirmación de la resolución de instancia supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, al que se dará el destino legal. ( D. A. 15ª de la L.O.P.J. según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre).

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.